

DIARIO DE SESIONES PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

COMISIONES



Núm. 331

VIII Legislatura

Año 2010

GOBERNACIÓN

Presidencia: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Jiménez Vélchez

Sesión celebrada el lunes, 5 de abril de 2010

ORDEN DEL DÍA

PROYECTOS DE LEY

Debate agrupado de las siguientes iniciativas:

- 8-09/PL-000008. Comparecencia de los agentes sociales y organizaciones que pudieran estar interesados en la regulación del Proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía.
- 8-09/PL-000009. Comparecencia de los agentes sociales y organizaciones que pudieran estar interesados en la regulación del Proyecto de Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas, treinta y seis minutos del día cinco de abril de dos mil diez.

Proyectos de Ley

8-09/PL-000008 y 8-09/PL-000009. Comparecencia de los agentes sociales y organizaciones que pudieran estar interesados en la regulación de los Proyectos de Ley de Autonomía Local de Andalucía y reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (pág. 3).

Intervienen:

- D. Antonio Moya Monterde, representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
- D. Diego Valderas Sosa, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
- Dña. María Dolores López Gabarro, del G.P. Popular de Andalucía.
- D. Fernando Manuel Martínez Vidal, del G.P. Socialista.
- D. Andrés Ocaña Rabadán, Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba
- D. Rafael Aljama Alcántara, representante de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.)

Se levanta la sesión a las diecinueve horas, cinco minutos del día cinco de abril de dos mil diez.

8-09/PL-000008 y 8-09/PL-000009. Comparecencia de los agentes sociales y organizaciones que pudieran estar interesados en la regulación de los Proyectos de Ley de Autonomía Local de Andalucía y reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muy buenas tardes.

En primer lugar, me van a permitir que mis primeras palabras como Presidenta de la Comisión de Gobernación, ya de Gobernación y Justicia, sean para dar la bienvenida a don Antonio Moya y a don Luis Picón, en representación de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que les dé la bienvenida a esta Comisión, que pretende analizar, con los agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad, y también, con una representación de los ayuntamientos y de algunos movimientos asociativos, dos leyes que van a ser cruciales para el futuro de los ayuntamientos de Andalucía. Y por tanto van a ser cruciales para el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. En ese marco hemos creído que era fundamental oír la voz de la Confederación de Empresarios de Andalucía y queremos, en nombre de todos los grupos parlamentarios, darles las gracias por su presencia hoy aquí y por sus aportaciones, que estoy segura de que serán ricas y numerosas. Muchísimas gracias, y bienvenidos de nuevo.

El señor MOYA MONTERDE, REPRESENTANTE DE LA CEA

—Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta de la Comisión.

Señoras y señores diputados, comparecemos ante esta Comisión para dar nuestra opinión sobre dos proyectos de ley que traen causa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En su momento, como saben, la Confederación también respaldó desde el ámbito político-institucional, y que suponen, por lo tanto, un desarrollo del Estatuto de Autonomía; además, con un marco de alta cualificación, como lo demuestra la exigencia de la mayoría reforzada para su aprobación.

Evidentemente, son dos textos que, desde la óptica empresarial, tienen una visión muy distinta, pues el relativo al ámbito tributario no comporta, de forma directa, nuevas obligaciones para el ámbito empresarial, sino, siendo su contenido de carácter exclusivamente técnico-jurídico y no genera, a nuestro modo de ver, ningún comentario especial por nuestra parte, más allá

de indicar que quizás los datos que se puedan tomar en consideración en relación con el volumen de la población sean los del año 2009, para acercar más la norma a la realidad en el tiempo; así como que en su caso se considere el tratamiento no solo cuantitativo de la población, sino, como hipótesis que sugerimos, pudiera darse un tratamiento cualitativo, atendiendo a criterios como inmigración, edad o dependencia, que pueden servir como elementos moduladores, insisto, sobre el criterio poblacional aplicado a este texto normativo. Dicho todo lo cual, y reiterando que no tiene una importante incidencia en el ámbito productivo, centraremos nuestra intervención en el otro proyecto de ley, el relativo a la autonomía local, que sí puede tener un mayor impacto sobre la competitividad de nuestras empresas.

La regulación de las entidades locales, sus ejes instrumentales y sus competencias, es de enorme importancia, señorías, para la actividad empresarial, no solo por lo concerniente a su funcionamiento, sino, principalmente, por su incidencia sobre la competitividad de las empresas andaluzas, pues muchas de estas están hoy en día encontrando graves problemas financieros por la morosidad de las entidades locales andaluzas.

Como comentario general, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, resulta conveniente apoyar cualquier norma que suponga la ampliación efectiva de la capacidad financiera de las corporaciones locales, siempre que ello no implique un aumento de la carga fiscal para las empresas. Asimismo, nos parece positiva cualquier norma que defina perfectamente cuáles son los ámbitos competenciales de las corporaciones locales y de la Junta de Andalucía, evitando duplicidades que posibiliten un uso ineficiente de los recursos económicos y estableciendo mecanismos que impidan los solapamientos procedimentales. Si las leyes que hoy se someten a nuestra consideración consiguen ambos objetivos, incremento de la capacidad financiera y clarificación de las competencias, nuestro sector empresarial se verá positivamente afectado, pues, tanto la continua morosidad, como digo, como la complejidad administrativa y competencial inciden directamente sobre la competitividad de nuestro tejido productivo.

Y, con independencia de esa premisa general, señorías, entendemos que en los textos presentados deberían incorporarse varios elementos que se consideran imprescindibles, de lo que denominamos una Administración eficaz y dedicada al servicio de la comunidad. Por ello, quiero referirme a un aspecto importante: la unidad de mercado y la cohesión social.

En primer lugar, a nuestro modo de ver, la norma debe atender al principio constitucional de unidad de mercado y de cohesión social, ya que este concepto se obvia en la norma y, a nuestro modo de ver, podría ser incluido en el texto del articulado de los proyectos de forma clara, concreta y precisa, ya que la autonomía

local es el objeto fundamental de la norma. En este sentido, la idea consiste en que la definición y ejecución de políticas públicas pueden tener como límite el respeto al principio de unidad de mercado y de cohesión social. Por tanto, la Ley de Autonomía Local de Andalucía no debería amparar la competencia entre corporaciones locales que tuvieran entre sus objetivos la atracción o expulsión de su territorio de las distintas iniciativas económicas y empresariales que se pongan en marcha. En consecuencia, señorías, a nuestro modo de ver, debe existir una garantía del adecuado equilibrio normativo en todos los entes locales que facilite la observancia del principio de unidad de mercado y de cohesión social dentro del territorio de Andalucía.

¿Qué nos preocupa, en concreto? Que la profundización en la autonomía local que se realiza en el artículo 4.3, donde dice «Cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas», pues bien, que ello no tenga como límites los principios constitucionales de unidad de mercado, cohesión social y solidaridad. Preocupación en un contexto en el que, salvo error por nuestra parte, la Constitución Española no es citada en la exposición de motivos de la norma. Sí se alude a normativa europea, sí se alude a normativa regional, pero en modo alguno al principio de normativa nacional a través de la Constitución.

Queremos referirnos también, señorías, al tema de participación institucional. Es cuestión que consideramos importante, la inserción en la norma del principio constitucional, y también estatutario, de participación institucional de los agentes económicos y sociales. En relación con ello, recordar que el artículo 7 de la Constitución, así como los diversos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, se encargan de consagrar este principio de participación institucional de los agentes económicos y sociales más representativos en la esfera de lo público.

Igualmente, la Unión Europea, en sus principios de gobernanza, invoca también esta participación de la sociedad civil en el ámbito de lo público. En relación con este principio, nos llama poderosamente la atención que el proyecto de ley de autonomía local de Andalucía en ningún caso obligue a las entidades locales a la incorporación y participación de los agentes económicos y sociales en sus órganos de participación ciudadana, máxime considerando el escenario de concertación que actualmente tenemos instaurado en Andalucía.

Y en este sentido, señorías, se deben tener en cuenta los ámbitos competenciales que son objeto de tratamiento como: el comercio, los espectáculos públicos, la movilidad ciudadana, el consumo o el medio ambiente, que obviamente tienen una alta incidencia sobre la actividad empresarial en el territorio. Y, asimismo, nos llama también la atención igualmente que se excluya de la regulación..., la participación institucional reglada, como es el caso de los hipotéticos consejos económicos y sociales, o, asimismo, el de las comi-

siones locales de temas sectoriales. Sin duda sería conveniente su tratamiento.

A continuación, quisiéramos referirnos a un concepto de neutralidad fiscal. Es cuestión a comentar la obligada neutralidad fiscal de los traspasos o reparto de competencias entre administraciones. La entrada en vigor de estas normas, a nuestro modo de ver, no debe suponer la ocasión para generar nuevas figuras impositivas o para incrementar las ya existentes. La premisa expuesta debe salvaguardar la competitividad de las empresas radicadas ya en cada territorio, evitando además una posible competencia fiscal. Cabría recordar que la competencia entre corporaciones locales debe traducirse, a nuestro modo de ver, en mejores servicios, pero no en un incremento de la presión fiscal. Por tanto, solicitamos la reflexión para que se incorporen en los proyectos preceptos limitadores de esta posibilidad fiscal.

Quisiera referirme también al tema de la directiva de servicios. La entrada en vigor de la norma, de la Directiva Bolkestein, debe significar la plena integración a nivel local de la directiva de servicios comunitaria. En estos momentos nos encontramos en la dinámica de la plena integración en el ordenamiento jurídico español de los contenidos de esta directiva, que pretende una agilización y dinamización de trámites, así como una nueva filosofía en la relación entre el administrado y la administración.

Por tanto, nos llama la atención que tanto en el espíritu como en los contenidos de la Ley de Autonomía Local no aparezcan reflejados los objetivos y principios de la directiva citada, dado que la misma lo que hace es, en esencia, fijar los ámbitos competenciales, así como agilizar los trámites para el impulso de la actividad empresarial y productiva.

Quisiera referirme, también, a un planteamiento importante para nosotros: la concurrencia entre empresas. Creemos que debería tenerse en cuenta en la norma la necesidad de limitar la libre concurrencia en el mercado de empresas públicas en igualdad de condiciones con las privadas.

Desde el punto de vista de una organización empresarial, como somos la Confederación de Empresarios, nos cuesta asumir la creación de entidades mercantiles desde lo público que puedan concurrir libremente al mercado con otras empresas ya formadas y constituidas por capital privado, y, en tal sentido, señorías, comprenderán que se puede compartir por criterios de eficacia y productividad que se creen agencias públicas empresariales locales, como las que se contemplan en el artículo 35, o sociedades mercantiles locales, contempladas en el artículo 38. Pero no acabamos de entender la necesidad de que nuestro mercado demande empresas públicas locales, a través del artículo 46, que expresamente actúen en régimen de mercado bajo el principio de libre competencia, tal y como se dice en el artículo 46.3.

Entendemos lógico el uso de instrumentos mercantiles públicos con la finalidad de incrementar la eficacia de la prestación de los servicios públicos del propio territorio, o cuando el sector en el que se instauren tenga una necesidad de fomento e inversión motivadas por el interés general, que haga necesaria la intervención de la Administración, debido a posibles escasos márgenes de rentabilidad. Sin embargo, resulta poco explicable que desde el ámbito de lo público se pudiera concurrir en mercados donde intervienen en competencia, entre ellas, empresas privadas que se pueden ver lesionadas por esa intervención y por la consiguiente distorsión del mercado.

Para evitar este riesgo, señorías, para evitarlo sería necesario que se incluyeran en la norma preceptos relativos a impedir la intervención de estas empresas públicas en sectores y territorios distintos al propio ámbito de la entidad pública en cuestión, o cuando su acción se realiza en actividades ajenas a la propia finalidad inicial del instrumento generado por la iniciativa pública. Ejemplos podríamos tener muchos, incluso en distintos ámbitos del territorio nacional.

Finalmente, y entrando en el articulado concreto, quisiéramos señalar algunas cuestiones, y entiéndanlas, señorías, incluso desde el ámbito de la duda razonable, no desde la presunción en modo alguno, dudas que nos surgen del literal del texto y que pueden, quizás, al analizarlas fuera del contexto general normativo, suscitar alguna disfunción.

Por ello, nuestra contribución al debate es la necesaria reflexión en el artículo 32.2. Al desarrollar el concepto de servicios públicos reservados, se indica que la reserva habilita para la prestación efectiva en régimen de monopolio de los servicios públicos. A nuestro modo de ver, quizá sería mejor señalar que el objetivo es garantizar el servicio, evitando la confusión con una prestación efectiva en régimen de monopolio, cuando después la prestación, artículo 33, se puede realizar bajo varias modalidades. En definitiva, señorías, se puede garantizar la prestación de garantizar el servicio, pero no necesariamente su prestación en régimen de monopolio. La prestación puede venir derivada de cualquier otro ámbito.

Dudas también y reflexiones a propósito del artículo 32.1 y del 33.3.a). Nos preocupa que se prevea la posible ampliación de tales reservas a un ámbito superior al previsto en el artículo 92.2, apartado d), señalando la norma, incluso, que se hará una memoria con los intereses empresariales afectados y las posibles compensaciones derivadas de esa reserva.

Pues bien, señorías, parecería que estamos ante una publicación de una actividad, situación equiparable a una, entiéndase, entre comillas, expropiación, y que en tal sentido, entendemos, debería incorporar algún tipo de salvaguarda, o procedimiento contradictorio que permita a los particulares su participación y, por consiguiente, la defensa de sus posiciones en el mercado.

Y termino. Artículos 35, 38 y 46. A nuestro modo de ver, quizá fuese necesario simplificar la presencia pública a través del Derecho privado, limitando tal acción, en todo caso, a su propio ámbito territorial y competencial, no teniendo opción de competir en el mercado, ámbito que, a nuestro modo de ver, como sus señorías comprenden, debe estar reservado a la iniciativa privada.

Y, por último, el artículo 61. Entre las tipologías de entidades e instrumentos de cooperación no aparecen las áreas metropolitanas, que sí son citadas en el artículo 94 del Estatuto de Autonomía. Comprendemos y compartimos la necesidad de concretar los tipos de entidades, pero debería concretarse de algún modo el contenido de lo expresado en nuestro propio Estatuto de Autonomía, o, al menos, brindamos la reflexión porque en ella se contienen de manera completa, también, las áreas metropolitanas.

Nada más. Muchas gracias, y quedo a su disposición.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias.

Abrimos, a continuación, un turno de intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman esta Cámara. En primer lugar, y en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Valderas.

El señor VALDERAS SOSA

—Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, agradecer a los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía que hayan podido darnos una información, yo diría, tan amplia, tan exhaustiva y tan directa. Y digo lo de directa porque, efectivamente, como compartiré conmigo, entre los planteamientos, que yo no voy aquí a situar en el terreno del debate, entre lo que plantea la Confederación de Empresarios, lo que planteamos Izquierda Unida, entre la convivencia que tiene que tener entre lo público y lo privado. La verdad es que yo creo que hay determinadas distancias que yo me ahorro en el debate, porque me interesan dos cuestiones, o tres, que sí le voy a preguntar para ampliar su información, que —estoy convencido— luego nos trasladará por escrito, o nos lo trasladará a la Cámara.

En primer lugar, una que yo creo que es muy necesaria, y que, al no hacer alusión, casi, en su intervención, muy cortita, relativa a lo que representan los tributos en la ley de tributos, quizás he visto que hay un cierto olvido entre lo que hoy está significando la relación empresarial, o empresas, o empresarios, e instituciones locales, y sobre todo en lo que significan los sistemas

de pago y de compromiso de pago de las instituciones locales con respecto a la moracidad de determinadas empresas públicas, perdón, empresas privadas, sean del carácter que sean. Y me parece que es importante porque, efectivamente, todos compartimos que están incidiendo, con una cierta importancia, en lo que es la actividad de determinadas..., en la capacidad de mantenimientos empresariales.

El segundo aspecto, porque, ya digo, ese no lo he visto lo suficientemente planteado, más allá del interés de limitar lo público para darle más espacio en la unidad de mercado y cuestión de mercado al tema de lo privado, que, ya digo, no voy a entrar en el debate.

Otro aspecto. No le he visto precisar con la suficiente fortaleza en el terreno de la participación institucional si es partidario de que a partir de determinados..., como diría yo, de determinado volumen de lo municipal, sean ciudades de cinco, diez, quince o veinte mil habitantes, debería ser con cierta obligación el tema de la configuración del consejo económico y social, y que pudiera estar en la ley para que esa participación no quedase simplemente a la voluntad del municipio de decir: creo, o no, un consejo económico y social, que normalmente ya están en todas las diputaciones, creo que están en las grandes ciudades, pero no lo tienen en su generalidad todas las ciudades del conjunto de Andalucía.

Si bien es cierto que usted nos plantea que, más allá de lo que debería ser, lo que yo entiendo, lo óptimo en participación, ese consejo económico y social donde están representados todos los sectores más dinámicos de la vida económica o social de una ciudad, usted plantea también unas comisiones de participación de carácter sectorial en todo aquello en lo que intervienen los elementos del desarrollo económico, del desarrollo del comercio.

Y, finalmente, una última pregunta que a mí sí me motivaría el tener y conocer su opinión.

Una corporación municipal es elegida para cuatro años, y no he visto que hagamos ningún ejercicio para que no se privaticen servicios públicos más allá de los cuatro años de un mandato, porque creo que incluso juega mal contra determinadas empresas que concurren libremente al mercado de los servicios públicos y lo acogen por 25 años. Y yo creo que, en ese cierto aspecto, se está haciendo una limitación de las actividades de libre competencia en el mercado de los sectores empresariales que concurren a los servicios públicos. Y a mí me gustaría saber si usted estaría dispuesto a que tuviéramos una ley que acotara que ningún gobierno privatice ningún servicio más allá de cuatro años. El que viene puede darle continuidad, pero ¿por qué un ayuntamiento va a privatizar por 25, si a los cuatro años ha cambiado y ya Pepito no está, está Manolito? Entonces, me gustaría conocer su opinión en esos tres aspectos que le he pedido.

Muchas gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Valderas.

Interviene a continuación, en representación del Grupo Popular, la señora López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO

—Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, en nombre del grupo político al que represento, quisiéramos darles las gracias por su comparecencia hoy aquí, y me sumo a las palabras del portavoz de Izquierda Unida porque ha sido una comparecencia exacta, exhaustiva y estudiada en profundidad.

Y sí hay una cuestión, al margen de lo que han expuesto, que hay muchos aspectos que compartimos, pero yo creo que ha dicho algo fundamental, y es que el objetivo de esta norma es mejorar la prestación del servicio sin que ello suponga una mayor presión fiscal, y, para que ello no suponga una mayor presión fiscal —cosa que compartimos plenamente con usted—, sí es cierto que ahí tiene mucho que decir la ley de participación en los ingresos o en los tributos. Por eso, sí que me gustaría saber cuál es su opinión, grosso modo, sobre la ley que se ha puesto encima de la mesa.

Cierto es que nosotros no compartimos esa participación en los tributos que ahora mismo recoge la ley, porque la consideramos fundamentalmente escasa. Consideramos que se están trasladando competencias a los ayuntamientos sin financiación, con lo cual esa financiación de algún sitio debe salir. Si no lo hace la Junta de Andalucía de sus recursos, puede llevar a figuras impositivas, que es lo que usted ha expuesto que se debería evitar y compartimos plenamente con su exposición.

En cuanto al ámbito de confluencia de las empresas públicas y privadas, creo que ha hecho una apreciación muy acertada de que a veces esa libre concurrencia no se produce en los términos en que debiera producirse, y creo que será una apreciación que habrá que matizar profundamente en la norma.

Más allá de eso, en cuanto a los agentes sociales —que sí que ha expuesto usted, pues la importancia del Consejo Económico y Social, o la gestión en general que los ayuntamientos lleven a cabo de la mano de los agentes sociales—, sí es cierto que no está matizado en la norma, y que depende, a día de hoy, mucho del legislador o de... No del legislador, perdón, sino del alcalde o la alcaldesa, del gestor, de la persona que gestione en ese momento la entidad pública. Ya hemos escuchado otras apreciaciones en ese sentido, y sí que es realmente interesante que los agentes sociales tomen y formen parte directa de lo

que es la gestión y la decisión de un cargo público sobre la gestión de su municipio.

Pero sí me gustaría, ya para finalizar, agradecerle de nuevo la comparecencia que ha tenido, y que precisara, si le es posible, su opinión sobre la participación en los tributos para que ello no suponga una nueva figura impositiva en esta prestación de servicios.

Muchas gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señora López.

Tiene a continuación la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VIDAL

—Gracias, señora Presidenta.

Buenas tardes, señorías, y buenas tardes a los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, al señor Moya y al señor Picón. Hemos escuchado atentamente sus planteamientos. Nos parece que, efectivamente, como han señalado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra en nombre de los otros grupos parlamentarios, han hecho ustedes un buen trabajo, un examen exhaustivo de la ley, y hay algunas cuestiones con las que yo quería plantear algún elemento, al objeto de clarificar algunas cuestiones, ya en su cierre, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerlo ahora.

En cuanto a lo que es la participación, los instrumentos participativos, una de las cuestiones que aparece en los primeros artículos de la ley, efectivamente, es la consideración de los ayuntamientos como los elementos en los que de una manera más clara se vehiculiza la participación ciudadana en todos sus elementos. Entendemos que el haber apostado de una manera yo creo que bastante clara por la autonomía local en esta ley, por la potestad de autoorganización, implica dar por una vez el estatus que los ayuntamientos han venido demandando en estos 30, ya 31 prácticamente —se han cumplido, creo que fue antes de ayer, efectivamente, el día 3, los 31 años de las primeras elecciones municipales, ¿no?—, que es que son también estados. Es algo que a veces se nos escapa, y que en el subconsciente parece que los ayuntamientos, los municipios y las provincias son administraciones de un segundo nivel o de una entidad menor, cuando no es así: son estados como lo puedan ser las comunidades autónomas o el propio Estado.

En ese sentido, la apuesta que ha hecho la ley entendemos —así lo compartimos con el Gobierno, somos el grupo que sustenta al Gobierno— que es por reforzar la potestad de autoorganización, para que sea

cada municipio el que pueda incardinar los elementos participativos que estime convenientes de acuerdo con sus necesidades en función de lo que es la dimensión demográfica, las características del término municipal, etcétera. No obstante, me parece interesante, desde luego, porque creemos —y ustedes lo saben perfectamente— que ese ha sido un modelo de esta Comunidad, el de hacer muy participativa la interlocución social en la gestión de los intereses públicos, ya sea desde las cuestiones puramente económicas, con los siete acuerdos de concertación que ya llevamos a nuestras espaldas, como en el propio trámite en el que nos encontramos ahora mismo, y que se viene reiterando desde hace ya muchísimos años en esta casa, y en ese sentido, bueno, pues veremos en qué medida algunos de los planteamientos que ustedes nos hacen podemos incorporarlos a lo que serán las enmiendas que en su día ya plantearemos.

En otras cuestiones que han trazado, lógicamente desde su óptica como representantes de los empresarios andaluces, los aspectos donde puede haber algún tipo de fricción, en el mejor sentido, por supuesto, de la palabra, fricción legítima, ¿no? —vivimos en un mundo en el que coinciden intereses, coinciden legítimas intenciones en la vida, y eso implica que haya puntos de fricción—, efectivamente, han planteado una serie de cuestiones. Yo creo que, tal cual están enunciadas en la ley, concretamente el artículo 36 —¿el 36 era, o el 46? No me acuerdo: el que hablaba de la libre competencia—, entendemos que, además, deja claro que tiene que ser régimen de libre competencia. No obstante, si se puede buscar alguna cláusula de salvaguarda que refuerce esa cuestión, cuando nos referimos a las empresas públicas locales, pues también trataremos de trasladarlas a nuestros planteamientos.

Y en cuanto a las áreas metropolitanas, que, ciertamente, no aparecen mencionadas como tales en el artículo 61, sí hay una cláusula general en el apartado c), en el que, bueno, se podrán adoptar otras formas jurídicas, que yo creo que por ahí también podríamos tener respuesta a lo que...

Por lo demás, yo espero que nos hagan llegar sus consideraciones por escrito, como viene siendo habitual, y seguro que de ahí sacaremos también nuestras propias conclusiones en un sentido muy positivo.

Así que nada más, y agradecerles, en nombre del Grupo Socialista, su comparecencia esta tarde.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Martínez.

Y para contestar o debatir acerca de las cuestiones que se han planteado, tienen ustedes de nuevo la palabra.

El señor MOYA MONTERDE, REPRESENTANTE DE LA CEA

—Muchas gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias a los tres portavoces de los grupos por sus amables intervenciones y por la valoración que se hace del trabajo bien intencionado, y, sobre todo, leal e institucionalmente colaborador, que procuramos llevar a cabo en todas nuestras intervenciones.

Tengo que comenzar señalando que, además, estos dos proyectos de ley han sido conocidos, en algún momento de su diseño, por parte de la Consejería de Gobernación, y que, por tanto, hemos tenido un cierto conocimiento en momentos apropiados que nos ha permitido también, quizás, ese trabajo de calidad, que no es simplemente cuando los borradores se colocan encima de la mesa a última hora, ¿no?

Entonces, con respecto a las intervenciones concretas, evidentemente, como no puede ser más que lógico, nosotros no venimos, lógicamente, a debatir, y menos aún de conceptos de tributos o de cuestiones públicas o privadas. Les agradezco a sus señorías su comprensión.

Miren, señorías, yo, con que seamos capaces de tener un fondo creado, ya nos parece más que suficiente. Lo demás es simplemente... Para el pago de la morosidad, ¿no?, me estoy refiriendo. Lo demás ya es una cuestión de cómo hacerlo. Desde el ámbito empresarial, siempre nos gustaría dos cuestiones que forman piedra angular de nuestros planteamientos: una es la certeza económica y otra es la seguridad jurídica. Si todo ello, además, lo adobáramos con la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, pues nos encantaría.

¿Cómo podemos traducir eso? Pues yo no sé si se puede sacar una norma que diga para nosotros... Nos gustaría que se pudiera pagar en 15 días mejor que en un mes, y en un mes mejor que en dos, y en dos mejor que en tres, y si además los intereses de demora, pues no hay ni que solicitarlos, sino que va de suyo, extraordinario. Y si, además, se obliga a que no se pueda pagar nada más que en efectivo y que no pueda haber letras u otro tipo de concepto mejor, es decir, la tutela efectiva de esos derechos, como les decía. Entonces, es complicado que nosotros digamos la forma porque, además, y en alguna otra contestación intentaré responder a su señoría, lo que a nosotros nos parece suficiente es la creación de fondos. La articulación, como se vaya a hacer, habrá que verla en el proyecto concreto para poder discutirla, ¿no?

Bien, con respecto a la segunda cuestión, bueno, pues está claro que nosotros sí entendemos el límite de lo público, pero no porque abominemos en modo alguno de las iniciativas públicas ni de las empresas públicas. La Confederación de Empresarios de Andalucía tiene afiliadas algunas empresas que son públicas y nuestras relaciones con las empresas públicas son unas

relaciones bastante cordiales y eficaces en muchos de los casos. Lo que sí nos parece es que tanto nuestro ordenamiento constitucional como los planteamientos que derivan del ordenamiento fundamentalmente europeo sí priman las iniciativas privadas por delante de las públicas y, además, desde un punto de vista economicista, nos parece que ese tipo de iniciativas son mucho más eficaces y que dan un mejor servicio en calidad, en coste para los ciudadanos. Y, por tanto, no se trata de fobia alguna hacia las empresas públicas, sino lo que creemos es que la limitación de lo público conlleva una eficiente administración de los recursos y permite, en línea con los planteamientos de la Unión Europea, pues que allí donde pueda haber iniciativas privadas no venga lo público a distorsionar la capacidad de competir, en términos generales, ¿no?

Con respecto al tema de la participación institucional me pasa un poco como cuando me refería a la creación del Fondo [...]. Nosotros no vamos a desarrollar de manera concreta, máxime cuando, además, lo que hacemos es decir: «atención, señores de los grupos, que no existe contemplada la participación institucional». Y, bueno, a partir de ahí corresponderá al que tiene la iniciativa legislativa conformarla y ponerla en marcha. Nosotros no osamos decir cuál podría ser la nuestra, pues, evidentemente, contemplada, como sabe su señoría, en el doble sentido que ha dicho, por una parte, que los agentes económicos y sociales de una manera amplia y generalizada podíamos tener acceso al conocimiento generalizado y puntual. Y, luego, otra forma de participación es encauzarla directamente, y por eso la hemos sugerido también a través de órganos de participación reglada, órganos de participación que pueden ser los consejos económicos y sociales, etcétera. Pero, en fin, como tampoco queríamos, desde ámbitos regionales, dictar cómo tendrían que ser la capacidad de interlocución en los ámbitos locales, pues con que simplemente se recoja, será posible además, incluso, desarrollarla en el ámbito posterior reglamentario.

Y, bueno, en definitiva, esta nota..., no respondemos a la ley porque la ley no dice nada, ¿no?, y no con respecto a la cuestión de privatizar más allá de cuatro años, señorías. Yo lo único que les puedo decir es que la rentabilidad económica, seguramente, haría inviable el adverso de las iniciativas privadas de esta forma, a no ser que pudiéramos decir que sería factible si, además, encareciéramos las perspectivas, pues, lógicamente, una viabilidad a cuatro años resulta difícilmente encajable, ¿no? Pero, en cualquier caso, muchas gracias por su intervención porque nos induce a reflexionar acerca de estas cuestiones.

Por el Grupo Popular, señora López, tendría que decir un poco cuál es nuestra opinión sobre la participación de los tributos. Es que estos son aspectos puramente políticos. Nosotros, con relación a las relaciones de las propias administraciones no entramos. Podría yo, una vez más, decir que el mejor tributo es el que no

existe; el mejor tributo o impuesto es aquel que queda minimizado desde todo punto de vista, pues seguramente debe de haber algún punto de equilibrio en el que..., pero, en fin, son teorías muy conocidas, ¿no? Los esfuerzos personales a los que un individuo está dispuesto a acceder..., parece ser que hay estudios incluso de tipo sociológico que suponen que más allá de un tercio empieza a resultar bastante molesto al individuo y a las empresas también, ¿no? Pero, en fin, entraríamos en terrenos de la sociología. Concretar esos aspectos a mí me parece un poco atrevido por nuestra parte, ¿no?

Y con respecto a la competencia entre lo público y lo privado, pues creo que ya me he explicado un poco con este tipo de planteamientos y lo mismo en cuanto a las consideraciones de los órganos de participación institucional.

Y, por último, para el portavoz del Grupo Socialista, pues, efectivamente, coincidimos, la ley profundiza en la autonomía municipal, también son Estado. Nos puede parecer..., no es una opinión que nosotros tengamos que sentir como nuestra, porque corresponde una vez más al ámbito de la vida política, pero está claro que cuando las administraciones locales tienen una mayor capacidad de financiación propia y tienen una política económica saneada, pues, seguramente, van a estar en mejores condiciones de responder, en términos de mercado, a los compromisos que contraen con las empresas y también en muchas ocasiones van a verse menos tentados de solicitar de las iniciativas privadas actuaciones complementarias en determinados ámbitos, que muchas veces son exigencias que rozan el límite de lo razonable, y, bueno, que a veces suponen esfuerzos importantes para la iniciativa.

Lo que sí quiero es ser claro en una cuestión, y por eso nos hemos debatido en el análisis pormenorizado de lo que son las agencias, de lo que son las sociedades. Pero lo que sí tenemos muy claro es que no deben existir empresas públicas locales. Espero haberlo dicho de la manera a que se refería el señor Valderas de una manera clara y directa.

Nada más.

Muchas gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias.

Permítame que, en nombre de la Comisión, le agradezca de nuevo su presencia hoy aquí y especialmente la intervención en nombre de la organización a la que representan y las aportaciones que en ella han hecho. Aportaciones claras, concretas y exhaustivas, y también muy rigurosas que estoy segura de que nos van a permitir enriquecer los proyectos de ley en los que este Parlamento está trabajando.

Muchísimas gracias de nuevo y cuenten ustedes con nuestra colaboración, del mismo modo que hoy hemos querido contar con la Confederación de Empresarial de Andalucía.

[Receso.]

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de don Andrés Ocaña, Alcalde de Córdoba. Va a ser la primera intervención por parte de los distintos ayuntamientos andaluces que van a comparecer ante esta Comisión, y queremos agradecerle no solo su presencia, sino sus aportaciones, que constan ya en poder de todos los diputados y diputadas que componemos esta Comisión.

Por explicarle brevemente —aunque estoy segura de que la conoce— cuál es la dinámica de funcionamiento: en primer lugar intervendrá usted, y nos dará sus opiniones y sus aportaciones de los proyectos de ley que estamos debatiendo y que afectan tan directamente a las corporaciones locales de Andalucía. A continuación haremos una ronda, en la que participarán los portavoces de los distintos grupos políticos. Y cerrará usted la intervención con aquellas consideraciones que crea oportunas.

Esta es la dinámica con la que hemos venido trabajando. Y si le parece bien, a partir de este momento, tiene usted la palabra.

El señor OCAÑA RABADÁN, ALCALDE DE CÓRDOBA

—Pues muchísimas gracias. Buenas tardes.

Y quisiera, en primer lugar, agradecerles la posibilidad que tengo de poder dirigirme a ustedes en estas dos importantes leyes, tan esperadas por los ayuntamientos, y, además, considero que es una oportunidad histórica, que no debemos dejar pasar ni podemos desaprovechar, para que de una vez por todas los ayuntamientos seamos mayores de edad y salgamos de esta situación de tutela en la que estamos por parte de otras administraciones. En definitiva, para hacer realidad lo que dicen los artículos 137, 140 y 142 de la Constitución, y también lo que dice el artículo 92 de nuestra Carta Autonómica.

Considero que estas dos leyes, estos dos proyectos de ley, son fundamentales para que de una vez por todas se sitúe el nivel de los tres poderes territoriales que marca la Constitución en términos de igualdad y en términos de plena autonomía por parte de los ayuntamientos. En definitiva, para que de una vez por todas las relaciones de los ayuntamientos con otras administraciones se basen en los principios de coordi-

nación y cooperación, y en ningún caso de supeditación de unos poderes a otros.

Por poner una semblanza inicial, un ejemplo inicial, por ejemplo, considero fundamental que este proyecto de ley —me estoy refiriendo ya al Proyecto de Ley de Autonomía Local— debe suprimir cualquier requisito en el que se requiera informe vinculante de otra administración, para hacer realidad esa equidad y ese situarse en el mismo nivel al que antes me refería, y esto debe ser así, y para que, en el supuesto de que un ayuntamiento se aparte de las recomendaciones de un informe preceptivo, las diferencias debieran dirimirse en sede judicial con todas las medidas precautorias que sean necesarias.

Dicho esto a modo de introducción y de premisa básica para entrar ya en el articulado y entrar en el contenido del proyecto, en primer lugar, y en el primer bloque, en relación a la exposición de motivos, considero necesario que se incluyese una referencia a la relación entre las instituciones de la Junta y los entes locales, tal y como prevé el artículo 60.1.a) del Estatuto. También se echa de menos en dicha exposición de motivos un reconocimiento a la labor que hemos venido realizando los ayuntamientos en estas tres décadas, desde la constitución democrática de los mismos, coadyuvando con el Estado y con el Gobierno de la Comunidad a alcanzar cotas de desarrollo y bienestar para el conjunto de la ciudadanía que sin este sobreesfuerzo municipal hubiera sido imposible lograr. Considero esencial que ese reconocimiento se recoja en esta exposición de motivos del proyecto de ley.

Por otra parte, también debe incluir la exposición de motivos principios de la organización territorial, que, de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto, se regirá por los principios de autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

En otro orden de cosas, y respecto del ejercicio de las competencias, debería añadirse el principio de la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas. Junto al objetivo de garantizar la titularidad de las competencias municipales, debe también declararse el de la suficiencia financiera de los entes locales para el óptimo cumplimiento de las competencias que se le asignan en esta ley. Y, por último, del bloque de exposición de motivos, es necesario señalar los principios y fundamentos éticos para el ejercicio del buen gobierno —algo que entendemos también en esta coyuntura esencial—, reseñando los deberes y derechos de los cargos públicos y de los grupos municipales y las garantías del ejercicio de la pluralidad democrática.

En el siguiente bloque, en el Título Preliminar, debiera ampliarse la referencia a competencias y potestades, de forma que se recoja algo ya dicho, la suficiencia financiera, y los principios de legalidad, responsabilidad,

transparencia, lealtad y colaboración institucional con el que deben actuar las distintas administraciones en el ejercicio de sus competencias.

Antes de entrar en el bloque de competencias, entiendo que la ley debiera recoger un artículo referente a las potestades municipales, y ahí le adjunto, en el escrito que les he aportado, una posible redacción donde se recojan, en los términos de referencia de la legislación vigente, potestades como la reglamentaria y la de autoorganización, la tributaria y la financiera, la de programación o de planificación, la expropiatoria, etcétera; también prerrogativas como la presunción de legitimidad y de la ejecutividad de sus actos y acuerdos, la imposibilidad de embargar sus bienes y derechos, exención de impuestos del Estado, etcétera. Es decir, una relación y una redacción que en el documento tiene referenciada y, por tanto, por economía de tiempo, no voy a referirme a ellas.

Y ya entrando en el bloque de competencias, considero interesante e importante, en base al criterio de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, mejorar la cláusula general de competencias y suprimir la entrada en cada una en materia de, ya que las competencias, más que como materias, habría que definir las como funciones propias de los entes locales.

Reitero el ejemplo que puse en la introducción, de que ningún informe puede tener carácter vinculante en lo que se refiere a la aprobación de las figuras de planeamiento, que deben corresponder en su totalidad a los ayuntamientos, y que las normas sectoriales puedan establecer efectos suspensivos que garanticen el control de legalidad, que solo debe corresponder a la jurisdicción competente. Considero fundamental, porque la experiencia así lo demuestra, el que se incluya como competencias municipales, con la redacción que se consensuó en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la competencia de creación de empleo y desarrollo empresarial, con una serie de funciones y de propuestas que también se recogen en el documento, como ordenación y gestión de políticas activas de empleo; planificación, diseño de especialidades y gestión de la formación ocupacional; gestión de programas de empleo para la adquisición de experiencia laboral que favorezca la ocupación; gestión de programas de autoempleo y de asesoramiento técnico para la creación de empresas... En definitiva, una función que creo que los ayuntamientos, como competencia impropia, hemos venido desarrollando con eficacia, y entendemos que podemos ser la administración más efectiva en este campo.

En otro orden de cosas, y en el marco de competencias, considero que se debiera dar una nueva redacción al bloque de competencias relativo a servicios sociales, tal y como se acordó también en el documento de propuestas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En otro orden de cosas, y respecto de la obligación de mantenimiento de centros escolares, la

experiencia nos demuestra que en el marco de esta ley debíamos superar la situación actual en cuanto a definición de lo que son las competencias municipales, y en este caso de la Administración autonómica, de modo que todas las infraestructuras y medios del sector educativo deban depender de la misma administración, en este caso de la Junta de Andalucía, y el papel municipal ceñirse a las actividades extraescolares y a la dinamización de la participación en el sistema educativo y acciones formativas no regladas.

En cuanto a competencias que el proyecto asigna *ex novo* a los ayuntamientos, en concreto la relativa a control sanitario y alimenticio, y también a las de medio ambiente. Considero que es fundamental que estas nuevas competencias deben conllevar la transferencia también de los recursos. Y en ese sentido, en la página 11, propongo una posible redacción de una disposición transitoria que dice lo siguiente: «En todas aquellas competencias que la presente ley atribuye a los municipios y que, al momento de su entrada en vigor, se esté ejerciendo por la Comunidad Autónoma, o sean compartida de esta, se habrán de transferir los recursos correspondientes para su desempeño. Tanto la asunción efectiva de dichas competencias como las transferencias de recursos habrán de ser simultáneas».

Y por último, en este marco de competencias, con relación a las diputaciones, considero que es necesario reformular el texto, de forma que cuando se trate de competencias municipales, solo mediante acuerdo del ayuntamiento afectado puedan ejercerse por las diputaciones, no a criterio unilateral de estas.

Asimismo la actuación por sustitución en caso de incumplimiento deberá estar sometida a un procedimiento claro y preciso establecido por ley. De modo que queden las reglas del juego muy bien estipuladas y muy claras.

En cuanto a la Ley de administración de Autonomía Local, una última consideración, y en la misma dirección de algo ya expresado con anterioridad, y en consonancia con lo que propone la Federación Andaluza de Municipios y Provincias respecto de la necesidad de constituir un Consejo de Gobiernos Locales para la defensa y protección de la autonomía local, con la finalidad de conocer, con carácter previo, cuantos anteproyectos de ley, planes o proyectos de disposiciones reglamentarias y actos administrativos de carácter general se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma e informar sobre su posible impacto en el ámbito competencial local.

Entiendo que es la creación de este Consejo de Gobiernos Locales permite que haya siempre un trabajar de la mano y un desarrollo normativo acorde también con la opinión de los propios ayuntamientos.

Esto, en cuanto a la Ley de Autonomía Local; en cuanto al proyecto de ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad Autónoma,

unas consideraciones muy básicas y muy elementales. Entendemos que los dos proyectos de ley tienen que ir de la mano, son fundamentales, así se recoge y así se ha entendido al contemplarse el trabajo conjunto. Y en este tenor, en este segundo proyecto dos consideraciones.

En primer lugar, que la entrada en vigor del ciento por ciento de la aportación sea en el 2012. Entendemos que ya no se puede demorar más que los ayuntamientos contemos con una regulación efectiva y cuantitativamente acorde con las necesidades que tenemos los ayuntamientos. No podemos esperar más tiempo. Entendemos que el 2012 es un periodo razonable, con la cuantía de 1.000 millones de euros.

Y, también, en segundo lugar, en función de la tramitación de la aprobación de esta ley, el que sus efectos tengan carácter retroactivo, enero 2010, y con una aportación de 600 millones de euros para que ya los ayuntamientos podamos beneficiarnos, si se puede decir, con esta expresión de la trascendencia de esta importante ley.

He ido muy rápido, porque lo he facilitado para que lo tengan por escrito, y creo que por economía, y también porque podamos hablar mejor que exponer, quiero terminar por donde comencé. Reitero el agradecimiento a que me permitan exponer nuestro punto de vista. Obviamente son criterios no partidarios, pero sí influidos por la posición que tiene mi organización política, Izquierda Unida, en lo que se refiere a estos dos proyectos de ley. Y lógicamente el grupo parlamentario será mucho más concreto en cuanto a su posición de todo el articulado de los dos proyectos, pero considero fundamental que, por lo menos, en lo que represento, alcalde de una ciudad, los elementos filosóficos esenciales y la defensa de la autonomía municipal y el superar la situación histórica, repito, de tres décadas, que yo creo que ya es hora de que la superemos, pues, es lo que les he expuesto y lo que he recogido en esta documentación que les he facilitado.

Y reitero lo que dije al principio, es una oportunidad histórica que, de verdad, no debemos dejar pasar y que el municipalismo, pues, estamos lógicamente esperanzados de que, una vez por todas, de una vez por todas, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma esos déficits se superen.

Ya espero que ustedes, en su trabajo parlamentario, pues, también sean sensibles con esta vieja demanda que hacemos desde los ayuntamientos.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Pues, muchas gracias, señor alcalde.

Interviene, en primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida, el señor Valderas.

El señor VALDERAS SOSA

—Sí. Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, para agradecer a mi compañero y amigo, Andrés Ocaña, en representación de la ciudad de Córdoba, la información que nos trae sobre dos leyes, que compartimos contigo, y que son tremendamente importantes. Yo diría que estamos hablando del futuro del municipalismo en Andalucía, pero de algo también muy fundamental, es como dejar ya la arquitectura de la Administración territorial de nuestra Comunidad Autónoma de cara al futuro. Y en ese aspecto, ambas leyes juegan un papel tremendamente importante.

Yo soy consciente, por lo tanto lo digo de la última parte de la intervención del Alcalde de Córdoba. Yo diría que él nos trae una posición práctica desde una visión progresista del municipalismo, que desde Izquierda Unida venimos practicando desde hace bastante tiempo en la ciudad de Córdoba, y sobre todo con aspectos muy particulares de la importancia de los servicios públicos y de la defensa de los servicios públicos. Y ahí va a ser mi primera pregunta. ¿Y por qué lo digo? Porque la intervención anterior, de la CEA, ha habido el efecto contrario: ha sido una defensa de limitar todos los elementos de los servicios públicos al máximo para que todo quede en manos del mayor sentido privatizador de lo que significan los servicios públicos.

Y en ese terreno, por lo tanto, posición del Ayuntamiento de Córdoba, desde una posición muy práctica que tiene, porque yo diría que estamos ante uno de los ayuntamientos que en materia de servicios públicos, pues, nos desarrolla un papel muy importante, y yo diría ejemplar, pues, cuál es la visión que tiene el Alcalde de Córdoba sobre el papel de los servicios públicos y el mantenimiento y defensa de los servicios públicos, y qué servicios públicos principales debería tener ciertas limitaciones a la hora de la privatización que [...] incluso, los elementos que indican determinadas normativas europeas.

El segundo aspecto es hasta qué punto, y lo digo por el conocimiento, al ser responsable en la FEMP, se tiene de la ley estatal, y en qué punto está la ley estatal, y si esta ley estatal va a entrar a jugar, en cierta medida, con la ley andaluza, o vienen a compensarse, a compenetrarse, ¿no?, diría yo que sería lo fundamental. Y lo pregunto conociendo su presencia en la FEMP, y sobre todo compartiendo que la intervención que hace aquí es una intervención, yo diría muy cercana, por no decir cogida de la mano de lo que plantea la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que compartimos, al menos desde Izquierda Unida, en una gran medida.

Y el tercer aspecto es en el tema del proyecto de ley de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. Hay un debate en este momento con referencia a la ley. La ley recoge la participación en los tributos de la Comunidad, y nosotros planteamos que

debe ser la participación de los ingresos o de los recursos del conjunto de la Comunidad, porque lógicamente permitiría un mayor volumen de ingresos en línea con la propuesta que hacía, dado que compartimos que es muy limitada la propuesta de participación en los tributos, incluso llegar hasta el 2014, por la situación actual que tienen los ayuntamientos. Si no se le da una solución rápida a los ayuntamientos, compartimos el planteamiento hecho, muchos ayuntamientos se verán en una situación muy preocupante antes de finalizar el 2010. De hecho ya se tienen expedientes de regulación de empleo que son tremendamente preocupantes para el tema del trabajo.

Y luego, finalmente, el principio de coordinación y colaboración. Hay una figura, que no recoge la ley, en la que nosotros creemos que, más allá de la participación de los ayuntamientos en los tributos —quede como quede— de la Comunidad Autónoma, debería haber una especie de consejo de participación de los ayuntamientos en la planificación, coordinación, colaboración y codecisión de todas las políticas inversoras que va a hacer la Junta de Andalucía con respecto a los ayuntamientos, y si eso es lo que viene un poco a representar la última propuesta que nos hacía del Consejo de Gobiernos Locales. Porque, si es así, lo compartiríamos. Es un Consejo de Gobiernos Locales que, en coordinación y colaboración con la Junta de Andalucía, planifique todas las actividades de recursos que la Junta pone en los ayuntamientos y que tiene que ser planificado de forma conjunta a través de ese Consejo.

Esas serían las cuatro preguntas que le formulo en este momento, agradeciéndole la información y dándole por sentado que muchas de las propuestas que hay aquí, al menos desde Izquierda Unida, las transformaremos en enmiendas para mejorar ambos proyectos.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Valderas.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, interviene a continuación la señora López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO

—Gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, para agradecerle, en nombre del Grupo Popular, su comparecencia hoy aquí y la información que nos ha trasladado, que es una información que pone de manifiesto la realidad que están sufriendo los ayuntamientos, no en estos momentos, en los que está más agudizada, sino que la vienen padeciendo desde hace ya bastantes años.

Y compartimos muchos de los aspectos que usted ha puesto encima de la mesa. Ha empezado usted

citando la supresión de los informes vinculantes, y lo compartimos plenamente.

Nosotros, desde el Grupo Popular, consideramos que estamos ante un proyecto de ley tremendamente intervencionista por parte de la Junta de Andalucía. Añadía usted la necesidad de ampliar las competencias en algunos ámbitos, y lo consideramos plenamente necesario, puesto que, si analizamos el proyecto —y esa es nuestra postura—, realmente no cede nuevas competencias o hace mención a competencias que ya vienen ejerciendo los ayuntamientos desde hace muchos años, sin tener financiación para ello, cosa que ha abocado a los ayuntamientos, en gran medida, a la situación en la que se encuentran hoy día. Pero, además, ha expresado usted la necesidad de la suficiencia financiera, y eso es fundamental, puesto que estamos en un momento histórico, en un momento en el que se puede conseguir ese municipalismo tan deseado, pero, claro, estas dos leyes tienen que ir de la mano. Y tienen que ir de la mano no solo temporalmente, sino que tienen que ir de la mano consecuentemente con el objetivo que se pretende. No se pueden transferir competencias sin transferir la suficiencia financiera, puesto que abocaríamos a los ayuntamientos a un cierre en cadena. De hecho, desgraciadamente, ya hemos conocido algunos de estos casos.

Y, en cuanto a la exposición que hacía usted con respecto a la Ley de la Participación en los Tributos —ya lo ha expuesto el portavoz de Izquierda Unida—, efectivamente, ahora mismo, pues, la discusión se está centrando entre participación en los ingresos y en los tributos.

Nosotros compartimos, al igual que Izquierda Unida, que la participación debe ser en los ingresos. Cuando hablamos de tributos, hablamos de 771 ayuntamientos para 1.000 millones de euros; cuando hablamos de ingresos, es de 771 ayuntamientos para 33.000 millones de euros. Pero además, desde nuestro punto de vista, me parece realmente importante su posicionamiento en esta cuestión: ¿Qué opina sobre los ingresos y los tributos? Porque, además, le digo que, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley que ha entrado en la Cámara ya no solo no recoge participación en los tributos, sino que ni tan siquiera llega a ello, porque hay tributos sobre los que no se participa absolutamente en nada, como IRPF o IVA, por citar algunos, con lo cual, la ley que está encima de la mesa, de la que depende realmente que los ayuntamientos salgan de la situación catastrófica por la que están pasando hoy día, por llevar años asumiendo competencias que no suyas sino de la Junta, sin tener financiación, pues, el posicionamiento sobre esa ley es fundamental, porque de ahí va a depender que, realmente, se consiga o no la autonomía deseada. Por eso le digo que compartimos muchas de las cuestiones que usted ha planteado; consideramos que, efectivamente, como usted ha incidido en ello, también permítame que yo lo haga, en suprimir

esos informes vinculantes porque ponen de manifiesto el intervencionismo de la ley que está encima de la mesa y que no se consigue el municipalismo pretendido.

Y sí me gustaría, pues, que usted se posicionara sobre esa situación de participación en ingresos o participación en tributos, porque ahora mismo la ley que está encima de la mesa, como le digo, desde nuestro humilde punto de vista, no aspira y no recoge las necesidades que tienen los ayuntamientos.

Gracias por su comparecencia. Y ha sido un placer el haber escuchado desde un ayuntamiento, desde una alcaldía, cuál es la situación real que estáis viviendo y qué necesidades tenéis, porque sois los que padecéis en primera mano, sois la administración, la institución que está más cercana a los ciudadanos, quien más conoce sus demandas y quien tiene que prestarles el primer servicio a los ciudadanos, y, sin embargo, carecéis de los recursos para ello. Y, cuando hablo de financiación, sí un matiz. Y, efectivamente, comparto con usted no solo suficiencia financiera, sino también recursos; no hablamos ya solo de liquidez, sino de todo lo que implican los recursos.

Muchas gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señora López.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ VIDAL

—Gracias, señora Presidenta.

Darle la bienvenida al señor Ocaña, en nombre del Grupo Socialista.

Yo también hago una lectura muy positiva de lo que ha sido su planteamiento, porque entiendo que en ello hay un espíritu constructivo. Y creo que, a partir de ahí, podremos encontrar puntos en los que hallemos el consenso, porque hay muchas cuestiones en cuanto a lo que es la concepción del mundo de lo local que compartimos —y me remito a las primeras palabras de su intervención—: no somos una administración subordinada a otras, no somos un peldaño, en un orden jerárquico, de lo que es la administración del poder político y democrático en nuestro Estado, sino que estamos en un nivel que tiene que operar desde el punto de vista de las competencias, una funcionalidad, pero de la coordinación y nunca de la subordinación. Ahí estamos absolutamente de acuerdo.

Me ha parecido bien, también, el planteamiento de su intervención en el sentido de ir al grano, para que seamos concretos y no nos andemos por las ramas, ¿no? Hay una serie de planteamientos muy claros en

su intervención, con los cuales se puede discrepar o no, se puede estar más o menos de acuerdo, habrá que analizarlos en profundidad. Pero, en cualquier caso, sí es de agradecer que se venga con un documento, como el que usted nos ha presentado y que nos ha, después, trasladado en su intervención, en el cual hay algunas propuestas concretas.

Hay algunas cuestiones que reclama que estén recogidas en el texto, como son potestades clásicas de expropiatoria, de autoorganización, etcétera, que yo creo que están enunciadas en las leyes básicas de..., en la legislación básica del Estado, y que, quizás, por ello, no aparezcan de manera expresa en la ley. Es decir, es una cuestión de comprobarlo. Entendemos que es así y que, quizás, esa es la razón de que no aparezcan con esa claridad en el texto que estamos analizando.

Y en cuanto a otras cuestiones a las que usted se ha referido, fundamentalmente ya desde el punto de vista financiero, nosotros entendemos que esta ley —o la Ley, en este caso, de Participación— viene a conformar y a darle ya el rango de ley —ya no será cuestión de voluntad política, sino que será cuestión de que exista una norma legal que a todos nos obliga a su cumplimiento— a lo que ha sido un instrumento con el que han contado los ayuntamientos —yo también le hablo, en este caso, como concejal que soy, que soy municipio también— para financiarnos, que es el Fondo de Nivelación. Este Fondo de Nivelación hay que reconocer que se ha quintuplicado en los últimos seis años y que ha experimentado un crecimiento del 25% en este ejercicio. Se podrán buscar maneras de implementar esa partida, pero creemos que el esfuerzo ha sido importante y, además, no tiene parangón con el de ninguna otra comunidad del territorio nacional, prácticamente.

Y hay una cuestión en la que han incidido ambos grupos, y no es cuestión de polemizar en este trámite con ello, pero es algo que venimos hablando no solo ya ahora en lo que es el debate de la ley, que se inició hace unos días con el debate de totalidad en Pleno, sino incluso en el grupo de trabajo que nos precedió durante los meses de junio a septiembre, si no recuerdo mal, que es la cuestión de participación en los ingresos, participación en los tributos. El Estatuto es claro: en el artículo 192.1 habla de participación en los tributos.

Y yo creo que, en ese sentido, deberíamos trascender ese tipo de cuestiones e ir más a en qué medida podemos clarificar las cuestiones, y no filosofar sobre algo que no tiene cabida en el Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, entendemos, así lo consideramos, que la ley, lejos de ser intervencionista, puede en algún elemento... Ha puesto un ejemplo muy claro, que es el de eliminar los informes vinculantes. Pero, en líneas generales, creemos que la ley apuesta muy claramente por reforzar la autonomía local desde el reforzamiento de la potestad de autoorganización. Es algo que está, también, en el artículo 4, en el artículo 5, del proyecto

de ley, y que, por otra parte, se establecen mecanismos para incrementar lo que es la capacidad de gestión de los asuntos públicos por parte de los ayuntamientos, como son el de la transferencia y el de la delegación de competencias. Y esto lo enlazo ya con lo que decía al principio. Yo creo que esta ley, más allá de que, como cualquier cuestión, puede ser mejorable —y estamos, precisamente ahora, en el trámite de poder mejorarla, con las aportaciones que ustedes nos hagan, y que nosotros traslademos mediante las enmiendas que planteemos en los próximos días—, pues, esta ley, como decía, creemos —este proyecto de ley— que apuesta de verdad, apuesta de verdad, de una manera decidida y clara, por considerar a los ayuntamientos, después de treinta y un años ya, más que mayores de edad. Y en esa línea es en la que vamos a trabajar desde el Grupo Socialista, buscando, por supuesto, el consenso con otras fuerzas políticas, como es el caso, no a la que usted representa aquí. No viene usted aquí como representante de Izquierda Unida, pero a ver, lo ha manifestado. Pues bueno, comparto lógicamente, los planteamientos de su formación y así se ha hecho eco también su compañero.

Por nuestra parte, reiterarle nuestra gratitud por lo que es el documento que nos facilita mucho el trabajo, y, por supuesto, por ese espíritu, entiendo que constructivo, que en todo momento, desde nuestro grupo, hemos considerado que era el que usted ha manifestado a través de sus palabras.

Nada más y muchísimas gracias.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Martínez.

Tiene a continuación el señor Ocaña de nuevo la palabra.

El señor OCAÑA RABADÁN, ALCALDE DE CÓRDOBA.

—Pues muchísimas gracias por sus palabras, y no tenga la menor duda de que mi voluntad para estar aquí es totalmente constructiva, porque creo que no siempre desde otras instancias de lo que son las diferentes administraciones del Estado se reconoce y se conoce el papel, el importante papel que los ayuntamientos están desempeñando y han venido desempeñando en los treinta años de consolidación democrática.

Hay algo que posiblemente quienes más estamos en el ámbito municipal sí reconocemos, y fuera de él posiblemente no se reconozca. Es verdad que nadie nos ha dicho a los ayuntamientos que asumamos competencias que la Ley de Bases de Régimen Local no nos reconocía; pero estarán conmigo que el hecho de

ser la administración más cercana al ciudadano, y ya no solamente por el principio de subsidiariedad, sino por el hecho del contacto y del día a día con el ciudadano, hace que los ayuntamientos, no ahora, sino desde el primer momento, hayan generado esa ilusión de resolución de todos los problemas al conjunto de la ciudadanía, y yo entiendo que eso es algo que ya es irreversible. Se podrá acotar más, se podrá ser muy pedagógico con el ciudadano, trasladándole que tal problema que nos plantea no compete al ayuntamiento; pero estarán conmigo que, al final, siempre el ayuntamiento, por diferentes razones, tiene voluntad de resolver lo que nos demandan los ciudadanos, y eso nos hace estar en este momento en una situación angustiosa.

Por situarles solo el caso del Ayuntamiento de Córdoba, la participación en los ingresos del Estado este año se nos cae un 18%; lo que son ingresos propios, aproximadamente un 25%, y estamos obligados a mantener las mismas políticas o, por lo menos, hacer una resituación de políticas, como comprenderán, siempre cercanas a lo que los vecinos nos siguen demandando y siguen esperando de nosotros. Es decir, estamos en una situación difícil, en la que vemos como agua de mayo el que la tramitación de estos dos proyectos de ley, y su entrada en vigor, sobre todo la referente a lo de los tributos, pues sea lo antes posible, porque el Fondo de Nivelación no es el incremento, que hay que reconocer la voluntad de incremento. Lo que pasa es que el porcentaje, ante una cantidad tan exigua, representa lo que puede representar, sobre todo a ayuntamientos de cierto nivel como el que represento.

Pero, ya en la línea de lo que me han venido planteando, por ir del principio al final, está claro, y máxime en este momento, con las normativas europeas que inciden sobre la prestación de servicios públicos del ámbito municipal, yo creo que, por encima de todo, los ayuntamientos hemos venido demostrando durante mucho tiempo que la calidad y, sobre todo, el derecho universal de acceso a esos servicios con instrumentos públicos están garantizados. Y están garantizados servicios básicos como el suministro y depuración; servicios básicos como residuos, políticas de residuos; servicios básicos como transporte; servicios básicos como puede ser también el tema de cementerios..., en fin, una relación de servicios esenciales que entiendo que la garantía de que puedan tener una repercusión universal en el ciudadano solo la pueden garantizar, en este caso, los ayuntamientos.

El ayuntamiento que represento tiene una vasta y amplia experiencia en gestión a través de sociedades municipales y organismos autónomos de gestión de servicios, y creo que el tiempo demuestra el que podemos cumplir esos objetivos de universalidad, y, además, de acceso a esos servicios, de una manera razonable por parte del conjunto de la ciudadanía.

En cuanto al desarrollo normativo en el ámbito estatal, creo que fue en enero o febrero cuando hubo

una reunión con ministros y secretarios de Estado para situar el calendario de impulso de las dos leyes en el ámbito estatal. Saben que hay acuerdo en el Congreso de los..., no, Senado, perdón, en cuanto a, a mediados de año, iniciar en Congreso la tramitación de la Ley de Autonomía Local, y en ese tenor estamos también en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que soy Vicepresidente Segundo, estamos también impulsando el que se agilice, el que estas dos leyes, en el ámbito estatal, también se desarrollen con prontitud.

Y me plantean un debate sobre si tributos o ingresos. No soy jurista, no soy experto en Derecho, no sé, digamos, si hay algún impedimento legal o formal en cuanto a una cosa u otra. Señalaba el portavoz del Partido Socialista la referencia al Estatuto, pero hay una cosa muy clara: Los ayuntamientos en relación al Estado participamos de los ingresos, no de los tributos. No sé si a modo de comparación o a modo de argumento es contundente o no sirve para nada. Con total y absoluta prudencia lo señalo, pero los ayuntamientos participamos de los ingresos del Estado, y es una base importante de la financiación que nos sirve para funcionar. Por tanto, si a nivel de Estado es posible, entiendo, en mi modesta opinión, que a nivel de Comunidad Autónoma también sería posible.

Está claro que, simplemente por la referencia cuantitativa, para los ayuntamientos es más positivo que la referencia sean los ingresos y que no sean los tributos, entre otras cosas porque la distribución desde el punto de vista cuantitativo puede ser mayor. Pero lo único que les puedo señalar es que, si es posible, a nivel de Estado, con las corporaciones locales, supongo que también puede ser posible en el ámbito de la comunidad autónoma.

Ya saben que una parte importante de nuestros ingresos es la participación en los ingresos del Estado, la famosa PIE con la que anualmente y en función de número de habitantes, y también por tramos de población, pues hay unos porcentajes que se nos distribuyen a los ayuntamientos. Por cierto, les señalaba: Este año, en el caso de mi ayuntamiento, hemos sufrido una disminución de aproximadamente el 18%, una cantidad importante.

Y después, lo último que señalaba Diego, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Efectivamente, el Consejo de los Gobiernos Locales, tal y como lo plantea la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, puede ser un marco perfectamente idóneo para todo ese permanente contacto y relación que debe haber entre los gobiernos locales y el Gobierno de nuestra Comunidad.

En otro orden de cosas, no sé si soy capaz de calificar el proyecto de ley como intervencionista o no. La verdad es que es un poco..., sigue la inercia de lo existente. Hay que recordar que, actualmente, en el ámbito del planeamiento urbanístico, en lo que

se denominan «cambios estructurales», la última palabra la tiene la Comunidad Autónoma a través de la Consejería... —bueno, ahora Consejería de Obras Públicas otra vez—, la Consejería de Obras Públicas. Eso ha sido siempre. Lo que consideramos es que, en este momento, y aprovechando este cambio normativo, este nuevo escenario normativo, debiera residenciarse en los ayuntamientos, porque tenemos capacidad, entendemos, y responsabilidad suficiente como para que todo el ciclo del planeamiento se residencie en el ámbito del propio ayuntamiento, y, si hay discrepancias, pues que se diriman y se resuelvan en el ámbito judicial, que para eso está. Sencillamente consideramos que se debiera aprovechar este nuevo escenario para superar esa situación, que es la que tenemos en este momento en vigor.

Y, en cuanto a la pincelada de cómo estamos los ayuntamientos, yo creo que he sido explícito. Ya no es solo la caída de ingresos propios y la caída de la participación de los ingresos del Estado, pues hace que muchos ayuntamientos, y así se debate y se informa mensualmente en la FEMP, en la Comisión Ejecutiva, van a tener dificultades este año, incluso para afrontar el pago de nóminas a sus trabajadores, porque es una situación crítica.

Todos nos estamos apretando el cinturón, estamos reduciendo nuestros presupuestos, porque tenemos que salir de esta situación de la mejor manera, siempre garantizando lo que cada Gobierno municipal entiende prioritario. Nosotros hemos entendido prioritario los servicios sociales y las políticas sociales, y han tenido el respaldo presupuestario que se merecen y el mismo que en años anteriores. Pero en otros aspectos de políticas municipales, hemos tenido que reducir las previsiones y las asignaciones para desarrollarlas. En fin, esta es la situación en la que estamos viviendo.

Y reitero lo que he dicho en un par de ocasiones. Creo que estamos ante una buena oportunidad para que, de verdad, los ayuntamientos dejemos de ser esa Administración que tantos esfuerzos hacemos con los ciudadanos y que tanto estamos aportando para mejorar la calidad de vida de las ciudades y de la ciudadanía, pero de una vez por todas entremos a ser de una manera real, esa tercera pata del Estado que nos reconoce la Constitución, y dejemos de ser esos hermanos pequeños, muchas veces mal vistos, muchas veces mal considerados y muchas veces injustamente mal valorados.

La señora JIMÉNEZ VÍLCHEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias.

Queremos agradecerle, señor Ocaña, las aportaciones que ha hecho y que también nos ha dejado por escrito, aportaciones, si cabe, aún más valiosas,

porque parten de su experiencia como alcalde de una gran ciudad, como alcalde de Córdoba. Estoy segura, estamos seguros y seguras de que van a ser de una enorme utilidad a esta Comisión para dar ese impulso al municipalismo del que usted hablaba y que además es un objetivo que compartimos, porque es, precisamente, el mandato prioritario de esta tarea que el Parlamento de Andalucía ha encomendado a la Comisión de Gobernación.

Muchísimas gracias, de nuevo, por su experiencia, por su aportación y por su presencia hoy aquí.

[Receso.]

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señorías, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión de la Comisión de Gobernación, en relación con la comparecencia de agentes sociales para dar su aportación a la tramitación de los Proyectos de Ley de Autonomía Local de Andalucía y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Corresponde, en este caso, el turno al representante de Comisiones Obreras, don Rafael Aljama Alcántara, a quien le damos la bienvenida, al mismo tiempo que le agradecemos el esfuerzo que ha hecho por adelantar la hora de su comparecencia, que estaba prevista para más tarde, pero que, a instancias de esta Presidencia, ha hecho lo posible por estar aquí antes.

Por tanto, muchas gracias. Y tiene usted la palabra. No hace falta que le expliquemos cuál es el procedimiento porque usted ha sido colaborador de esta casa y de esta Comisión.

Así que tiene usted la palabra.

El señor ALJAMA ALCÁNTARA, REPRESENTANTE DE CC.OO.

—Bien. Muchas gracias, como siempre, por invitarnos a participar en el Parlamento.

Hacer una salvedad de entrada. En esta ocasión, pues, por la premura de tiempo y por la dificultad, que sabe el Presidente que teníamos una reunión del órgano de dirección en Málaga y demás, no puedo dejar la comparecencia por escrito, como sí tengo costumbre, pero en el plazo de veinticuatro horas se mandará por correo electrónico, como también otras veces lo hemos hecho. Entonces, la verdad es que está un poco garabateada y no sería prudente dejarla.

Lo más brevemente posible. Nosotros, desde Comisiones Obreras, lo primero que queremos es valorar positivamente la importancia de la apuesta política que se afronta con el presente anteproyecto. Creemos que responde, efectivamente, a una necesidad formulada

hace ya mucho tiempo, más de una década, por los diversos partidos y agentes políticos de nuestra Comunidad, y de la que nuestra organización se ha hecho eco en repetidas ocasiones. Esta ley y su complemento de la Ley de Financiación forman parte de ese núcleo fundamental de leyes que vertebran políticamente a nuestra Comunidad. Por lo tanto, por eso hemos hecho también un esfuerzo importante por estar hoy aquí y poder aportar nuestras propuestas.

En esta comparecencia nosotros nos vamos a circunscribir, lógicamente, como sabe, muchas veces, a formular nuestras aportaciones en aquellos temas que, a nuestro entender, tienen un mayor contenido socioeconómico, y, por lo tanto, en el tema de la financiación, vamos a obviar intervenir. Creemos que es una cuestión donde nosotros, pues, tenemos menos que decir.

La primera premisa es que es una ley difícil, es un anteproyecto difícil porque tiene que basarse en tres pilares que ya existen y que son importantes: uno es la Cámara, otro es nuestro nuevo Estatuto de Autonomía y otro, la Carta Europea de Autonomía Local. Entonces, es difícil ensamblar todas esas cuestiones en un anteproyecto.

Nosotros nos hemos centrado, como ya digo, en una serie de competencias, entre las que destacamos los servicios locales de interés general y la competencia de la iniciativa económica local.

Creemos, en líneas generales, que, de alguna manera, el anteproyecto sí se ha centrado en trasladar las competencias de una manera efectiva, siempre que luego vengan acompañadas de las correspondientes dotaciones económicas. Pero que esa idea de que esos tres pilares que yo decía antes, de alguna manera, el anteproyecto permite que haya, o permite que tengan capacidad de autoorganización las corporaciones locales y sean propias y exclusivas una serie de competencias que son importantes.

En estas competencias, el elemento que a nosotros nos interesa, o a una mayoría importante —estoy hablando, en principio, de generalidades—, son las modalidades de prestación de servicios.

Los servicios de interés general pueden prestarse, dice el anteproyecto, tanto en régimen de servicio público como de actividad reglamentada, y, bajo el régimen de servicio público, en forma directa o en forma indirecta, y ahí define que se pueden incorporar a los sujetos privados a través de figuras como la concesión, los conciertos, el arrendamiento, la gestión interesada, etcétera.

En esta línea, a nosotros no nos parece adecuada, y ya planteamos una posible modificación al texto, la posibilidad que se formula. Creemos que, tal y como se articula, y en la forma directa y en la forma indirecta de bienes suficientemente explicitados, y, por tanto, la posibilidad que vemos en el anteproyecto, de que se contemple, además, la prestación de servicios muni-

cipales por sujetos privados en los cuales el Gobierno municipal se reserva únicamente la reglamentación, nos parece que sobra. De la otra manera creemos que quedaría mucho más consolidado.

Por el contrario, sí queremos valorar como positiva la apuesta que hace el anteproyecto en el sentido de que el personal de las empresas públicas locales se seleccionará atendiendo a los principios de mérito, capacidad e igualdad y publicidad.

De igual manera creemos que sería positivo que el anteproyecto extendiera este criterio de selección a todo el personal de los distintos entes públicos locales, incluyendo a las fundaciones.

En general, en todas estas cuestiones, nuestra filosofía al abordar la ley va en un sentido. Entendemos que todos estos temas de gestión de personal, de prestación de servicios, será la futura Ley de Empleo Público de Andalucía la encargada de regular las condiciones, garantías, derechos y obligaciones de los empleados públicos de las distintas corporaciones locales y demás entes dependientes de las mismas. Pero nos parecería adecuado, porque no lo hemos visto en ningún sitio, o al menos en la exposición de motivos o en otro sitio, que se recogiera que el carácter regulador superior que tiene el Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo normativo que tiene que darse en Andalucía. O sea, en todas las cuestiones laborales y de gestión del personal creemos que la cesión de competencias es adecuada, no pueden extralimitarse, no es esa al menos nuestra filosofía, pero que el referente —y no se menciona en el anteproyecto de ley— es que el Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo en Andalucía tienen que ser un marco de referencia importante.

Eso, en cuanto a las cuestiones de gestión del personal y cuestiones de relaciones laborales.

Y, en cuanto a las diversas fórmulas de gestión que se definen en el proyecto de ley, incluida la de participación del sector privado, aun siendo conscientes de la facultad y el derecho de autoorganización que el propio texto otorga a los propios entes locales, creemos que también sería bueno que en la exposición de motivos se recogiera la referencia de todas estas figuras a su condición de sector público, sometiéndose también así a los principios que lo regulan, el sector público, recogidos igualmente en el Estatuto Básico, y que se desarrollen en la normativa específica en Andalucía.

Entonces, lo mismo que se hace referencia a otros proyectos normativos, creemos que, en cuestión de gestión de personal y de prestación de servicios, tiene que hacerse una mención expresa a ese tema.

Otro elemento en el que nos ha asaltado una duda es que el artículo 81.1 del anteproyecto se ocupa de la creación del que va a ser el órgano supremo de colaboración de la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales, el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición y funcionamiento se

regularán—según reza el propio artículo— por su propia ley de creación. Sin embargo, sabemos, creemos que, desde hace casi dos años, el Consejo ya está creado, en concreto, por la Ley 20/2007, de 17 de diciembre, con lo cual, nos causa una cierta sorpresa el que aquí se vuelva a reflejar.

Para finalizar esta primera parte de cuestiones generales sobre el contenido de esta ley, no queremos dejar pasar la oportunidad de manifestar nuestra opinión sobre la atribución de competencias a los entes locales en políticas activas de empleo. Expresamos nuestra valoración muy positiva sobre el hecho de que no se hayan incluido en el anteproyecto.

Desde Comisiones Obreras de Andalucía sabemos la conquista que supuso la transferencia de dichas políticas en nuestra Comunidad Autónoma, hace menos de ocho años, que se han convertido en una importante palanca de cohesión e intervención en el mercado laboral. Consideramos que sería un paso atrás descomponer las políticas activas de empleo en un universo atomizado, compuesto por más de setecientos entes distintos. Por ello, nos oponemos frontalmente a cualquier traspaso de titularidad de estas competencias actualmente residenciadas en el SAE. Por supuesto, sin que ello sea óbice para que se desarrollen y se sigan desarrollando fórmulas de colaboración como las que se vienen dando actualmente en la gestión de estas políticas por parte de los municipios.

En relación a cuestiones ya puntuales. Antes he mencionado algunas cuestiones que nos gustaría que figuraran en la exposición de motivos y otras más en este sentido.

Consideramos que, en esa exposición de motivos, sería bueno, sería conveniente que figurara una referencia expresa a la participación de los agentes sociales y económicos más representativos en las actividades de carácter socioeconómico de las corporaciones locales, tendentes a buscar fórmulas de concertación social en esos ámbitos que contemplen elementos nucleares de la misma, en materias como igualdad, como negociación colectiva, como salud laboral o prevención de riesgos laborales.

La experiencia de las últimas décadas en Andalucía ha puesto de manifiesto que la concertación y los acuerdos entre Administración, sindicatos y empresarios han sido instrumentos eficaces para el desarrollo económico, y, además, el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía marca como uno de los objetivos básicos el diálogo y la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales.

Nosotros entendemos que, situando el marco regulador superior, como he dicho, del Estatuto Básico del Empleado Público, por un lado como referencia, y, por el otro lado, posibilitando la concertación a nivel de los entes locales, estamos configurando un desarrollo armónico de relaciones laborales y de gestión de per-

sonal que puede ser muy útil para el funcionamiento de todas estas corporaciones locales, ¿no?

Y algunas consideraciones al articulado, que esas, como van a ir por escrito, pues voy a pasar muy brevemente sobre ellas. Alguna en el artículo 7: que puedan colaborar otros agentes con los servicios de Protección Civil en la sesión de simulacro de desalojo en los centros escolares, etcétera, o elementos como la ordenación, autorización, control y ejercicio de actividades económicas permanentes u ocasionales, en el artículo 7, apartado 23, y dos en que sí me voy a parar. Las demás, como ya digo, van a ir... Son nada más que cinco las que planteamos, y van en ese sentido.

Una. En el artículo 10, apartado g), se regula que la provincia prestará asistencia técnica a los municipios, y entra demasiado en detalles desde nuestro punto de vista. Habla de la formación y selección del personal, la elaboración de instrumentos de gestión de personal, planes de carrera profesional, evaluación del desempeño...

A nosotros no nos gusta que se matice tanto, porque por qué en esas cosas y no en otras. O sea, insisto, en que, para nosotros, el marco que tiene que dibujarse de las relaciones laborales y la gestión de personal tiene que ser el marco referencial del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Empleo Público de Andalucía, y luego la posibilidad de la concertación y la negociación colectiva entre los agentes. Entonces, pensamos que estas medidas tienen que ser reguladas por esa futura ley de empleo público de Andalucía y el anteproyecto debería abstenerse de establecer este tipo de normas, que lo que hacen luego es encorsetar por qué unas cosas sí y otras no.

Y la otra, en el artículo 27, cuando habla de los servicios básicos, pensamos que un importante caso—que además iría relacionado de una manera importante con la regulación del derecho a la vivienda— sería calificar la competencia municipal que reconoce el artículo 7.2 en materia de vivienda como una de las modalidades de servicios básicos que regula el artículo 27.2 del anteproyecto, incluyéndolo como un nuevo apartado. Con ello entendemos que esta competencia, ya reconocida, se rodearía de las mismas garantías de que goza el resto de los servicios básicos, y, por lo tanto, proponemos que en este apartado se incluya este nuevo apartado donde se reconozca esta competencia y se incluya como un servicio básico.

Y nada más. El otro era repetir lo del artículo 81 del Consejo Andaluz de Concertación Social; plantear que la redacción es que, cuando ya esté regulado, plantear qué se va a regular en la futura ley. Tendría que tener otra redacción u otro matiz.

Por nuestra parte, nada más. Disculpar que la premura de tiempo..., pues me avisaron el miércoles de la comparecencia de hoy, y en este periodo no se ha podido preparar de una manera escrita correctamente. Y quedo a su disposición.

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Aljama.

No se preocupe, porque, en tiempo y en forma, cuando usted nos lo mande por correo electrónico, yo se lo haré llegar a todos los portavoces, el texto al que usted nos hacía referencia.

Corresponde ahora el turno de posicionamiento a los portavoces de los grupos políticos, comenzado por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, para lo cual tiene la palabra su portavoz, el señor Valderas.

El señor VALDERAS SOSA

—Sí. Gracias, señor Presidente.

Agradecer, como no podía ser de otra forma, la información que nos traslada Comisiones Obreras a través de su responsable en esta materia, de las relaciones con la Administración andaluza, y esperando, lógicamente, el documento para incorporar aquellas cuestiones en las que podamos coincidir en los trámites de debate y de enmienda que a partir de que se terminen las comparecencias tenemos los grupos, simplemente tres preguntas, tres preguntas que he ido formulando también a otros comparecientes. Sobre todo una que hace referencia a los servicios públicos, el papel que deben jugar los servicios públicos, la importancia que tienen en la defensa de lo público, y si no tendría que haber algún elemento, algún artículo, alguna norma que pusiera limitaciones a lo que están significando los excesos de privatización de las corporaciones locales sobre los servicios públicos fundamentales. Y pongo un ejemplo, el mismo que le ponía a la CEA, pero me decía el campo contrario.

A la CEA le planteaba: ¿Es que acaso es correcto que, más allá de un mandato de cuatro años, un gobierno pueda privatizar un servicio público por 25, cuando ese gobierno puede cambiar a los cuatro años? Es decir, prácticamente puede un gobierno tener la tentación de dismantelar todo lo público, y dejarlo dismantelado para 25 años, más allá de la voluntad democrática que el pueblo soberano pueda tener en cualquier momento de elección.

Por lo tanto, sí me interesa saber si considera o no Comisiones Obreras, como un agente social importante, sobre todo en materia de servicios públicos, que tiene relación con el empleo, con la calidad del empleo y con los efectos del empleo, que ha descansado sobre tres pivotes importantes, la Ley de Empleo Público de Andalucía, el tema del Estatuto Básico del Empleo Público, y posibilitar la concertación a nivel local.

¿Y por qué lo digo? Porque posibilitar la concertación a nivel local significa intervenir en el desarrollo económico, en el desarrollo del empleo, en el desarrollo

de un elemento tan dinámico en la vida económica de una ciudad como es el ayuntamiento, que es uno de los elementos más dinámicos de la vida económica, del impulso económico. Yo diría en igualdad de condiciones: mientras más pequeña es la ciudad, todavía más fuerte el dinamismo que impulsa un ayuntamiento. Si hay esa privatización de servicios públicos sin limitaciones, como parece que, efectivamente, está ocurriendo en muchos ayuntamientos, qué opinión tendría Comisiones Obreras.

Segunda pregunta, la participación institucional, siendo los elementos de participación, yo diría, un aspecto fundamental y uno de los elementos más novedosos que debería tener esta ley.

Hasta ahora, los consejos económicos y sociales, que son instrumentos, yo diría, de participación, donde los agentes sociales, especialmente empresariales y sindicales, plantean en diversos ayuntamientos la posibilidad de intervenir en los presupuestos, de intervenir en determinadas políticas, sean sectoriales o sean de carácter globales, si tendría que haber una obligación de que a partir de determinado nivel de capacidad de ayuntamiento el Consejo Económico y Social fuese un elemento de obligado planteamiento, no como hasta ahora, que está a libre libertad o albedrío de cualquier gobierno municipal.

Y, luego, a mí me gustaría que se precisara un poco más cuál es el campo que en las competencias, con la intervención de competencias municipales en el terreno del empleo, se debe tener. Porque, claro, al menos nosotros estamos pensando que los ayuntamientos deben vigilar también por el cumplimiento en materia de empleo de los elementos, leyes y acuerdos que se suscitan, de obligado cumplimiento en todo el territorio andaluz, y observamos que los ayuntamientos tienen una cierta distancia con la situación, las condiciones y la propia calidad del empleo, no la que el propio ayuntamiento pone en marcha, sino también la incidencia del ayuntamiento por velar que haya condiciones adecuadas de empleo, y también una cierta capacidad de confrontar con respecto a algo que está significando, en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis también, perjudicial para el conjunto de una economía solidaria o de una democracia económica, que es el terreno de lo que está representando la economía sumergida. Y no hay... Eso es lo que nos mueve a nosotros a situar en qué campo de mayor actividad, en el terreno de las políticas activas de empleo, desde el plano de colaborar y desde el plano de tener también ciertas responsabilidades, los ayuntamientos deberían intervenir, no solo en los elementos de escuelas-taller, casas de oficio y tal, que hasta ahora viendo haciendo.

Esas serían las preguntas que en el campo de la posición de Comisiones Obreras me gustaría que pudiera un poco ampliar, bien ahora o bien por escrito, si lo considera oportuno.

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor Valderas.

Corresponde el turno al Partido Popular. Para ello tiene la palabra su portavoz, la señora López.

La señora LÓPEZ GABARRO

—Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradecerle su presencia hoy aquí, en nombre del Grupo Popular, y la aportación que ha hecho. Analizaremos detenidamente el texto que nos haga llegar para estudiarlo profundamente e intentar incorporarlo al proyecto que se está debatiendo y que tenemos encima de la mesa.

Ya el portavoz de Izquierda Unida ha expuesto algunas de las dudas que yo tenía; pero, compartiendo con usted, lógicamente, y como lo recoge la ley, los principios de mérito y capacidad que deben regir en toda contratación pública —por supuesto que debe ser así—, creo, si no he entendido mal, que ha dicho usted que ve con buenos ojos que no se contemple en la ley la cesión a los ayuntamientos de las políticas activas de empleo.

Me gustaría, si es posible, en ese sentido, que matizara usted si se refiere a todo tipo de políticas activas de empleo. Por ponerle un ejemplo en concreto, ¿la ordenación y gestión de estas políticas, tampoco entiende usted que se deben ceder a los ayuntamientos? ¿La formación ocupacional o, por lo menos, poder participar en esa formación ocupacional? ¿La gestión de programas de empleo? No sé si con su expresión se refiere a todas estas políticas, excluye a todas, o considera que hay algún ámbito en que sí deben estar presentes los municipios y los ayuntamientos, en concreto en una cuestión tan importante como es la creación de empleo.

Por lo demás, agradecerle su presencia aquí, su exposición, y analizaremos detenidamente el documento que nos haga llegar.

Muchas gracias.

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señora López.

Cierra el turno de posicionamiento de los grupos políticos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Vidal.

El señor MARTÍNEZ VIDAL

—Gracias, señor Presidente. Y también en nombre del Grupo Socialista agradecerle al señor Aljama su

comparecencia esta tarde aquí. Y como representante, en este caso, del grupo mayoritario que sustenta al Gobierno, entendemos que esa lectura en general positiva que ha hecho del texto al que se ha referido, pero que fundamentalmente ha centrado su intervención en el proyecto que conocemos como LAULA, y no tanto en el de participación en los tributos, pues congratularnos de que vea elementos positivos en lo que es, sin duda, una apuesta importante y decidida por completar la arquitectura institucional, el entramado institucional de nuestra Comunidad Autónoma.

Algunas cuestiones en las que usted se ha detenido, fundamentalmente relacionadas con el ámbito en el cual usted es representativo, con el ámbito sociolaboral, nos parecen acertadas y las compartimos, más allá de que sean, quizás, en otras normas jurídicas donde deban perfilarse de una manera más concreta los aspectos a los que nos hemos ceñido y que yo creo que compartimos todos, lógicamente, en las administraciones públicas, entendiendo por tales, en un sentido amplio del término, también los instrumentos o los agentes instrumentales, deben premiar siempre esos principios de mérito, capacidad, publicidad, igualdad, a la hora de hacer las contrataciones y, en ese sentido, creo que las referencias concisas que contiene el texto, creemos que son acertadas.

Y por lo que respecta a las políticas de empleo que ambos grupos y mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han manifestado sus planteamientos, a mí me parece haberle entendido que cree que debe haber una colaboración. Y ahora ya en contestación de lo que son las preguntas que le han formulado, tanto la portavoz del Grupo Popular, como el portavoz del Grupo de Izquierda Unida al respecto, pues [...] nos precisará en ese sentido.

Creo que en esta materia, como en tantísimas otras, los ayuntamientos hacen lo mismo que hacen todas las administraciones, comparten..., ninguna competencia es del todo exclusiva, es decir, ninguna materia es un compartimento estanco, sino que cada Administración tiene determinadas competencias, depende de qué materia se trate. Y todos estamos implicados en lo mismo, en dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. En este sentido, yo comparto también, como regla general, que estén las políticas activas de empleo donde ahora mismo están, en el ámbito de la comunidad autónoma y que, desde luego, se puedan implementar desde las administraciones locales, municipios y provincias, líneas de colaboración en coordinación y nunca pisándonos unos a otros, sino yo creo que siempre en estricta coordinación para que pueda darse respuesta, además, en una situación como la que venimos padeciendo de crisis económica en los últimos meses.

Cuando nos lleguen sus documentos, pues ya veremos en qué medida podemos incorporar a las enmiendas que planteemos en los próximos días los planteamientos que se hacen desde Comisiones Obreras. Y, por parte

del Grupo Socialista, solo reiterarle nuestra gratitud y el hecho de que, además, intuimos ya, por lo que nos ha manifestado, que va a ser un documento que habrá algunas propuestas muy concretas, lo cual a nosotros, de entrada, pues nos facilita bastante el trabajo.

Así que muchísimas gracias y nada más.

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor Martínez Vidal.

Como usted conoce, tiene la palabra para contestar, matizar o aumentar sus aportaciones, señor Aljama, tiene usted la palabra.

El señor ALJAMA ALCÁNTARA, REPRESENTANTE DE CC.OO.

—Bueno intentaré matizar, en la medida de lo posible y en lo que yo puedo dominar del tema, las preguntas que se me han hecho por parte de los grupos, fundamentalmente de Izquierda Unida y del Grupo Popular, en este sentido. Pero partiendo de la premisa de que es una ley compleja y que hay muchos matices que, como se decía, lo ha dicho alguno de ustedes, son elementos que no se contemplan en esta ley los que fundamentalmente a nosotros nos interesan más, que son las competencias en gestión de personal o en modelos de prestación de servicios.

La cosa puede ser tan complicada, si os cuento un secreto, que no salga luego en el *Diario de Sesiones*, que nuestras propias federaciones que tratan del tema, pues al abordar el tema muchas veces plantean una cosa y la contraria. O sea, porque en determinados elementos queremos tener capacidad de articular una negociación colectiva o una concertación que globalice, que unifique, pero luego queremos que se le den competencias en materia de gestión de personal bajando hasta el último detalle. O sea, son elementos muy difíciles a veces de amarrar, desde la perspectiva de lo público y de todo lo que ello conlleva, ¿no?

Voy a intentar, entonces, responder a las tres preguntas del diputado Diego Valderas y a la de la señora López.

A nosotros una cosa que nos ha preocupado siempre y yo creo que la posición de Comisiones Obreras sobre los instrumentos de gestión o la Administración instrumental de la Junta de Andalucía es muy conocida. Ya tuvimos oportunidad de plantearlos en la ley donde se abrieron todas esas fórmulas y cuál es ese tema.

Para nosotros la importancia de lo público no tiene ninguna duda. O sea, el elemento sustantivo de lo público es que para nosotros es la principal herramienta de igualdad que tiene esta sociedad, y es un elemento básico y fundamentalmente. Ahora bien, ¿hasta dónde

el control y el límite, hasta dónde los entes instrumentales o la Administración instrumental puede buscar unas fórmulas u otras para adecuar cosas? Nosotros ahí mantenemos una línea que, como digo, dentro de esta complejidad a veces no se sabe muy bien dónde está el límite, dónde está el borde.

Nosotros lo hemos manifestado en el documento y está claramente explicitado que la cesión al sector público sin ningún otro control que otorgarlo y regularlo, de alguna manera no estamos de acuerdo, ¿eh? Para nosotros el elemento clave de todo lo que tiene que ser un servicio público —y no hablamos de privatización—, es que la titularidad es pública, la planificación es pública, la dotación económica, por tanto la financiación, es pública y el control supremo de la gestión del recurso y, por lo tanto, el responsable supremo de la calidad de la prestación de los servicios es público.

Desde ese modelo, llevamos muchos años donde determinadas experiencias se han implantado en un servicio o en otro, y nosotros pues no hablamos de privatización cuando se dan estos límites y lo que se entiende como privatización es un modelo de gestión privado que se sale del encorsetamiento rígido de determinados modelos de Administración instrumental que existían antes y que eran los únicos. Entonces, siempre que la titularidad, la planificación, la gestión suprema y el control sean públicos y el responsable de la calidad sean públicos, en determinadas cosas la provisión del servicio, quien provee al servicio puede ser concertado, puede ser público. Preferimos que sea evidentemente público, pero sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de competencias que van a los entes autonómicos..., a los entes locales, perdón, o que van a tener los ayuntamientos o que tienen eso, como puede ser crear una red para la atención a la dependencia, es imposible, en la situación actual, que todo sea bajo una red absolutamente pública. Entonces, pues, ahí el modelo tiene que ser mixto. Lo único que tiene la responsabilidad suprema, como reside en el carácter público de la prestación, pues todo lo que estoy diciendo tiene que tener ese nivel. Entonces ahí andamos bandeando con unos modelos o con otros pero, desde luego, lo que sí queremos es que todas esas figuras, llámense consorcios, llámense fundaciones, llámense entes instrumentales que sean, estén bajo el paraguas de lo público y conformen un único sistema público de prestación de servicios, que lo tiene que gestionar el Gobierno de la Junta de Andalucía y es el responsable de la calidad de la prestación y de las condiciones.

Aunque en el pueblo equis de la sierra y lo tenga que prestar concertado, o con una asociación de familiares de no sé cuánto, o en otro sitio sea de otra manera. Evidentemente, los sindicatos estamos y lo que queremos es, para controlar la calidad del empleo, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero esas son cuestiones que tienen que venir, creemos que por otro camino, independientemente de ahí. Entendemos

que es muy difícil, a veces lo ha planteado gente en el ámbito sindical, que haya un convenio único para todas las entidades públicas o todos los entes públicos de Andalucía. Eso es una entelequia, es una utopía y, lógicamente, por ahí, no vamos a [...].

Segundo elemento, el de la participación institucional. Hombre, el Consejo Económico y Social, y yo lo digo por experiencia, porque desde que se fundó el andaluz soy el portavoz de Comisiones Obreras en el mismo, tiene un papel importante. Lo que yo no sabría, y estoy hablando desde Comisiones Obreras, pero sin ser una opinión contrastada con otras partes, que podemos verlo y mandarlo en el escrito de una manera más determinada, yo no sé la posible utilidad en determinados municipios pequeños, la rentabilidad real que tendría un consejo económico y social, en cuanto al coste que supone.

Por lo tanto, ponerlo obligatorio sería deseable. Y, si hablamos de participación institucional y aconsejamos que en todos aquellos foros donde sea posible se pueda plantear, pues, estaríamos absolutamente de acuerdo.

Pero me puedo ir a un ente pequeño en un sitio, donde al final es que no va a tener ni gente que participe en el [...] y va a tener un problema importante, ¿no?

Por lo tanto, obligatorio, yo no lo situaría en ese nivel; recomendable y útil, sí, y en todos los sitios donde posible que se pudiera plantear.

Y hasta donde el límite de intervención municipal o de participación de los municipios de las corporaciones locales en las políticas activas de empleo. Nosotros lo que tenemos muy claro es que, si estamos hablando de que queremos..., lo mismo que sí tú que puede ser una utopía conformar un único modelo de relaciones laborales para todo el empleo público andaluz, ¿eh?, también sí tú que sería un desastre tener 700 modelos laborales o de relaciones laborales, setecientos, no sé cuantos en los municipios..., setentaitantos, ¿no?, setecientos setenta y tantos de modelos de relaciones laborales diferentes, donde en uno las políticas de empleo primen o incentiven la contratación de una cosa, en otro primen otra, en otro primen otra cosa.

Entonces, nosotros ahí el límite lo ponemos en una cosa: es el Servicio Andaluz de Empleo el que tiene que detectar cuáles son los elementos nucleares de las políticas activas de empleo de esta Comunidad Autónoma. Entonces, las políticas activas de empleo se definen y se dotan a nivel autonómico. Luego, cola-

borar y controlar. ¿Cuáles? Pues, bueno, pues podríamos entrar a verlo. La formación, pues, a lo mejor se puede participar, pero lo que es la participación —lo mismo que decía antes—, la definición de las políticas activas, la planificación de esas políticas, la dotación económica, me parece que no puede ser una cosa que pueda quedar atomizada, como decíamos en nuestro texto sobre ese tema, porque además creemos que, por mucho que se pretenda mejorar la financiación local con lo que también va en esta segunda parte de la ley, me parece que las competencias que tienen los municipios no es dar un consejo que vaya por ahí, pero que bastante tienen con utilizarlo, utilizar los recursos en otras cuestiones, de las competencias que se les otorga en otras materias, prestación de servicios de proximidad, etcétera, etcétera, más que dedicar el tema a eso, ¿no? Me parece que iría por ahí.

Y luego, en ese sentido, pues, entrando puntualmente en cuáles se puede colaborar, yo creo que hay un amplísimo campo, y hay distintos modelos en los que distintas entidades o distintos ayuntamientos están colaborando, unos en una cosa, otros en otra. Y hemos mencionado las escuelas taller, etcétera, etcétera. Pero, bueno, incluso la formación profesional, a ver cómo termina el tema del acuerdo y cuáles son las que pueden impartir y cuáles no. Pero todo ese tema quedaría un poco al arbitrio de eso.

Pero, desde luego, la definición y la dotación económica nosotros la situamos a nivel autonómico.

El señor MESA CIRIZA, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Aljama Alcántara, por su comparecencia y por las incorporaciones que, ante esta Comisión, ha realizado en nombre de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, en este trámite tan importante de estos dos proyectos de ley, tanto de la autonomía local como de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Muchas gracias.

Sin ningún otro tema que tratar, suspendemos por esta tarde, hasta mañana, la Comisión, para continuar a las diez de la mañana con las siguientes comparecencias... Creo que comenzamos a las diez con el excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Sevilla.



SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD

PUBLICACIONES OFICIALES:

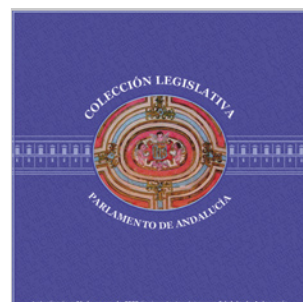
- Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía publicados cada legislatura y reproducidos en formato PDF. Actualmente están disponibles en CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la sexta legislatura.
- Colección de los Diarios de Sesiones publicados en cada legislatura y reproducidos en formato PDF. Están disponibles en CD-ROM las seis primeras legislaturas.
- A partir de la VII legislatura la colección de «Publicaciones oficiales» reúne conjuntamente los boletines oficiales y los diarios de sesiones.



(Próximos lanzamientos VIII Legislatura)

COLECCIÓN LEGISLATIVA:

- Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía. Cada ley contiene una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicación en los diferentes boletines oficiales e información, en su caso, sobre posteriores modificaciones o si han sido objeto de algún procedimiento de inconstitucionalidad.
- Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas de las imágenes más significativas de aquellos históricos acontecimientos.
- Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía, incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco Llagas con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos y patios interiores.
- Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros en cada una de las legislaturas transcurridas.





SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

Edición, diseño y composición:

Servicio de Publicaciones Oficiales

Información:

Servicio de Publicaciones Oficiales

Pedidos:

Servicio de Gestión Económica
c/ San Juan de Ribera s/n
41009-Sevilla

Teléfono:

(34) 954 59 21 00

Dirección web:

<http://www.parlamentodeandalucia.es>

Correo electrónico:

publicacionesoficiales@parlamentodeandalucia.es
diariodesesiones@parlamentodeandalucia.es
boletinoficial@parlamentodeandalucia.es



PRECIOS

CD-ROM O DVD

Colección legislativa	7,21 €
Publicaciones oficiales	7,21 €



© Parlamento de Andalucía